



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Luz Marina Duque Ocampo
DEMANDADOS	Departamento de Antioquia Colpensiones
RADICADO	05-001-31-05-017-2020-00354
TEMA	Pensión de sobrevivientes
DECISIÓN	Confirma y modifica sentencia

El veintidós (22) de febrero de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **029** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **LUZ MARINA DUQUE OCAMPO** contra el **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-**, con radicado 05-001-31-05-017-2020-00354.

• **RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA:**

En los términos de la sustitución de poder conferida por el doctor SANTIAGO MUÑOZ MEDINA, en calidad de apoderado judicial para procesos de Colpensiones de la firma MUÑOZ MEDINA ABOGADOS S.A.S., de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso, el despacho le reconoce personería para actuar a la doctora YESENIA CANO URREGO, identificada con cédula de ciudadanía 1.036.645.747 y portadora de la tarjeta profesional 271.800 del Consejo Superior de la Judicatura, para que continúe la representación judicial de la entidad hasta su culminación en el presente proceso judicial.

• **PRETENSIONES:**

Aspira la demandante se declare que le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de su compañero

permanente Jesús Alirio Vanegas Vásquez, bajo los principios de la condición más beneficiosa a partir del 15 de agosto de 2000, fecha del fallecimiento del causante. Como consecuencia, se condene al Departamento de Antioquia al pago de la pensión desde su causación, intereses moratorios o en subsidio indexación.

- **HECHOS**

La demandante sustentó las anteriores pretensiones en los hechos siguientes: que su compañero permanente, señor Jesús Alirio Vanegas Vásquez, falleció por causas de origen no profesional el día 15 de agosto de 2000, momento para el cual se encontraba afiliado para los riesgos de vejez, invalidez y muerte ante el Departamento de Antioquia. Que hizo vida con el causante desde el año 1980 hasta el momento de su muerte. Que elevó reclamación pensional ante el Departamento de Antioquia, siendo negada a través de las resoluciones 2019060151735, 2019060158517 y 2019060433690 de 2019. Que su compañero causó el derecho pensional, toda vez que dejó acreditado un total de 612.42 semanas, comprendidas desde el 3 de diciembre de 1974 hasta el 9 de noviembre de 1986.

- **CONTESTACIONES:**

Departamento de Antioquia: Se opuso a la prosperidad de la totalidad de las pretensiones, al señalar que el afiliado fallecido no dejó causado el derecho pensional. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: inexistencia de la obligación demandada, legalidad del acto, prescripción, compensación, buena fe exenta de culpa y la genérica.

Colpensiones: Entidad que fue vinculada al litigio mediante auto del 25 de junio de 2021, contestó oponiéndose a la totalidad de las pretensiones al señalar que carece de legitimación en la causa, toda vez que las pretensiones se dirigen en contra del Departamento de Antioquia. Como excepciones de fondo propuso las que denominó: falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación de reconocer y pagar intereses de mora o indexación, improcedencia de la indexación de las condenas, prescripción, buena fe de Colpensiones, compensación, la genérica e imposibilidad de condena en costas.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

El 23 de septiembre de 2021 el Juzgado Decimoséptimo Laboral del Circuito de Medellín condenó a Colpensiones a reconocer y pagar a la demandante la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su cónyuge Jesús Alirio Vanegas Vásquez, en cuantía del salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad con su respectiva indexación. Como retroactivo pensional causado del 9 de julio de 2015 al 31 de agosto de 2021 condenó al pago de \$67.433.155. Se autorizó a Colpensiones a realizar los descuentos en salud. Se absolvió al Departamento de Antioquia de la totalidad de las pretensiones. No se impusieron costas procesales.

- **APELACIÓN:**

La decisión anterior fue recurrida en apelación por **Colpensiones**, entidad que, a través de su apoderado judicial la sustentó en los siguientes términos: que no se logró demostrar una convivencia entre la demandante y el causante, pues aquella en su versión únicamente relata el cuidado que tuvo con este último durante un período de 4 años. Que antes del accidente de este último no se evidencia algún vínculo de afecto entre la pareja. Además, los testigos tampoco dan cuenta de la convivencia, ya que estos no tienen conocimiento del proceso de reconocimiento de sus hijos, a pesar de ser tan cercanos. Tampoco tienen claro el período en el que causante estuvo en estado vegetal.

- **CONSULTA:**

Por ser la decisión adversa a los intereses de Colpensiones, el expediente se remitió a esta Sala para ser conocido el proceso en grado jurisdiccional de consulta.

- **ALEGATOS:**

Fueron presentado por las partes, así:

Colpensiones: *“En la reciente sentencia SU-149 de 2021 la Corte Constitucional ratificó cuál es la correcta intelección constitucional de la citada norma, confirmando que para ostentar la calidad de beneficiario se debe acreditar un mínimo de 5 años de convivencia, ya sea en calidad de cónyuge o compañero (a) permanente. En efecto, el alto tribunal unificó su precedente sobre la materia, y particularmente, revocó la sentencia SL1730/2021 a partir de los siguientes argumentos (...) Para el caso en concreto, se advierte que no se probó la convivencia de la demandante con el causante, ya que su declaración no fue precisa en información relevante; así mismo*

los testimonios no logran probar que existió dicha convivencia, no cumpliendo con los requisitos mínimos exigidos para acceder a la prestación”

Demandante: *“Se debe reconocer la condición más beneficiosa como principio constitucional prescrito en el artículo 53 de la Constitución Nacional. En ese sentido, para el caso objeto de estudio, se debe aplicar la norma anterior, es decir, el acuerdo 049 de 1990 reglamentado por el Decreto 758 de 1990, la cual exige tener 300 semanas en toda la vida laboral o 150 años en los últimos seis (6) años al fallecimiento, para lo cual el afiliado tenía un total de 662 semanas en toda su vida laboral, superando las 300 semanas establecidas por la norma aplicable; teniendo en cuenta las sumas de tiempos públicos y privados, conforme a lo establece el literal F del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y, en Sentencias de la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, tales como: 1947-2020, SL1884-2020 y, 2304-2020 (...) La demandante, tiene la calidad de beneficiaria como compañera permanente, quedando dicha disposición demostrada durante la práctica de la prueba testimonial en la medida que se pudo acreditar la convivencia ininterrumpida desde 1980. Igualmente quedo demostrado que mi mandante fue la persona que se encargó del cuidado del señor JESÚS ALIRIO VANEGAS desde el año 1996, fecha para la cual tuvo un accidente de origen común que deterioro su estado de salud, por lo que, en la historia clínica, tal y como lo enuncia la juez, quedo claramente establecido que el afiliado fallecido manifestaba en sus ingresos clínicos que era acompañado por su compañera permanente con la cual tenía tres (3) hijos. Conforme a lo anterior se acredito más de los dos (2) años que exige la ley para ser beneficiaria y hacerse acreedora al pago de la pensión de sobrevivientes”*

Departamento de Antioquia: *“...respetuosamente formulo ante usted la ALEGATOS, con la finalidad que se revise en su integridad la audiencia de primera instancia en la cual si bien el departamento no resultó condenado, no se le dio la oportunidad del grado de consulta, y si bien la condena fue directamente a COLPENSIONES, deben observarse las circunstancias primigenias y las respuestas dadas por el Departamento en vía gubernativa, pese a que la juez concedió a favor del demandante, por condición más beneficiosa, no obstante las normas para el sector públicos son de carácter especialísimo. De ninguna forma debieron alegar una y otra parte una condena en costas ni agencias en derecho para las demandadas, ya que todo se hizo de forma virtual, al contrario si observa la toma de los testimonios y declaraciones podrá darse cuenta que al contrario el desgaste si es que se tuvo, se pudo haber ocurrido desde otras partes”*

CONSIDERACIONES:

Atendiendo a la apelación formulada por Colpensiones y a que la sentencia será revisada en grado de consulta, el problema jurídico para resolver por esta

Sala del Tribunal se circunscribe en determinar si a la demandante le asiste derecho o no a percibir la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de su compañero permanente en virtud del principio de la condición más beneficiosa, teniendo en cuenta la sumatoria de tiempo privados con los públicos sin cotización.

Para resolver lo anterior, se abordarán los temas en el siguiente orden: **i)** causación de la pensión y normatividad aplicable; **ii)** principio de la condición más beneficiosa; **iii)** sumatoria de tiempos públicos y privados con decreto 758 de 1990; **iv)** beneficiarios de la pensión; **v)** liquidaciones; **vi)** alegatos de las partes; y, **vii)** costas procesales.

i) Causación de la pensión y normatividad aplicable

Según el registro civil de defunción de la página 16¹, el señor Jesús Alirio Vanegas Vásquez falleció el 15 de agosto de 2000.

Teniendo en cuenta tal fecha de fallecimiento del afiliado, la normatividad aplicable al caso es la consagrada en los artículos 46 y 47 de la ley 100 de 1993 en su texto original, la cual establece que tendrá derecho a la pensión de sobreviviente los miembros del grupo familiar del afiliado, siempre y cuando este hubiere cotizado por lo menos 26 semanas al momento de la muerte o que habiendo dejado de cotizar, hubiere efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.

La historia laboral de Colpensiones de las páginas 181 a 183² da cuenta que el afiliado fallecido cotizó entre el 1° de octubre de 1970 y el 18 de marzo de 1973 188 días, equivalente a 26.85 semanas, aunque en la historia de las páginas 67 y 68³ se reflejan cotizaciones entre el 1° de octubre de 1970 y el 20 de marzo de 1972 por 167 días, equivalentes a 23.86 semanas; asimismo, del certificado laboral⁴ emitido por el Departamento de Antioquia se desprende que el señor Vanegas Vásquez laboró al servicio de esta entidad pública del 3 de diciembre de 1974 al 9 de noviembre de 1986, por espacio de 609 semanas, todas ellas sin cotización al ISS.

¹ PDF “01DemandaUnificada

² PDF “25ContestacionDemandaColpensiones”

³ PDF “05ContestacionDepartamentoAntioquia”

⁴ Folios 59 PDF “05ContestacionDepartamentoAntioquia”

Conforme lo dicho, no hay duda de que el afiliado no estaba cotizando al momento del fallecimiento, por lo que debía acreditar un mínimo de 26 semanas cotizadas el año inmediatamente anterior al momento de su muerte, requisitos que no cumple como acertadamente lo expresó la juez de primera instancia.

ii) Principio de la condición más beneficiosa

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en señalar que la norma aplicable para establecer el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es la vigente para el momento en que se causó el derecho, esto es, en relación con la pensión de sobrevivientes es la consagrada para el momento en que se produjo la muerte del afiliado. En el caso particular, como ya se indicó, el señor Vanegas Vásquez no dejó causado el derecho pensional con las exigencias de la ley 100 de 1993; no obstante, también consideró la Corte, en especial en sentencia SL2538-2021 que *“excepcionalmente, cuando el afiliado fallecido no completó los requisitos allí previstos, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, se aplica la normatividad inmediatamente anterior, siempre que se cumplan las exigencias y reglas que para ello han sido desarrolladas por la jurisprudencia...”*

iii) Sumatoria de tiempos públicos y privados con decreto 758 de 1990

Esta Sala del Tribunal era del criterio que en virtud del principio de la condición más beneficiosa en pensiones de sobrevivientes no era viable la sumatoria de tiempos públicos y privados con el decreto 758 de 1990, debido a que esta última norma no lo permite.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL5147-2020 y SL4165-2021 ha venido variando tal criterio, en el entendido que la sumatoria de tiempos públicos sin cotización y privados con el Decreto 758 de 1990 solo será aceptada cuando se trate de pensión de sobrevivientes en virtud del principio de la condición más beneficiosa y no cuando sea a través de dicho decreto directamente. En la primera de las sentencias, tal corporación expresó:

“En relación con el tema, el criterio de la Sala se ha orientado a señalar que para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes prevista en el Acuerdo 049 de 1990, por la vía de la condición más beneficiosa, no es posible la acumulación de tiempos de servicio públicos sin cotización al ISS con los aportes sufragados a esa administradora del régimen de prima media”

(...)

“Ahora, la Sala estima oportuno abordar el tema desde una nueva perspectiva y modificar tal línea jurisprudencial, a fin de permitir la acumulación de los tiempos públicos servidos sin cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales con los aportes sufragados a esa entidad, con la finalidad de acreditar las exigencias de aportes previstas en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, tanto para la pensión de sobrevivientes como la de invalidez, cuando se invoque su aplicación en virtud del principio constitucional de la condición más beneficiosa”

(...)

“En ese contexto, es claro que fue el propio legislador del año 1993 el que consagró como criterio rector en seguridad social, la posibilidad de acumular para el acceso a las distintas pensiones y prestaciones las variadas formas en que los afiliados concurren a la financiación del sistema. Así, se permitió la sumatoria de las cotizaciones a las distintas cajas o entidades administradoras del régimen con tiempos de servicios en el sector público, incluso anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y se previeron los instrumentos para facilitarla, tales como los bonos pensionales, cálculos actuariales o cuotas partes pensionales.

Ese criterio de regulación inclusivo obedece al reconocimiento de la circunstancia relativa a que, durante su trayectoria profesional, los afiliados tienen movilidad en los sectores público y privado en razón a las contingencias del mercado laboral. Por tanto, el Estado en esas condiciones debe garantizar el acceso a las diversas prestaciones económicas, pues, en últimas, lo que se protege es el trabajo humano como soporte de los derechos fundamentales e irrenunciables de la seguridad social.

La nueva orientación jurisprudencial sobre el tema guarda armonía con el criterio reciente de la Sala que abrió la posibilidad de adicionar tiempos de servicios públicos no cotizados al ISS con las semanas efectivamente sufragadas a esa entidad, cuando se acude en materia de pensiones de vejez a las previsiones del Acuerdo 049 de 1990 en virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL1981-2020, CSJ SL1947-2020, CSJ SL 74937, 26 ago. 2020 y CSJ SL 55270, 26 ago. 2020). En la segunda providencia citada, la Corporación precisó...”

De la jurisprudencia citada se desprende la posibilidad de sumar los períodos cotizados por el afiliado Vanegas Vásquez al Instituto de Seguros Sociales - ISS- y los laborados sin cotización al Departamento de Antioquia con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, para efectos de acreditar la densidad de semanas de que trata el Decreto 758 de 1990 para efectos de dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes en virtud del principio de la condición más beneficiosa, debido a que con la expedición de la ley 100 de 1993 el legislador permitió dicha sumatoria incluso con períodos anteriores a la vigencia de dicha ley, previéndose para el efecto varios instrumentos para la financiación de las prestaciones, entre ellas, los bonos pensionales, cálculos actuariales o cuotas partes pensionales.

Y es que la Corte explica el alcance del principio de la condición más beneficiosa. Al respecto, en la ya citada sentencia SL5147-2020 indicó que tal principio respetaba de la norma inmediatamente precedente los concerniente únicamente al cumplimiento del número mínimo de semanas de esa disposición, pero que los demás requisitos serán los establecidos en la normatividad vigente para el momento en que se causó el derecho. Puntualmente dijo la corporación:

“Nótese, además, que, cuando se trata de condición más beneficiosa, la alusión a la normativa inmediatamente precedente es para efectos únicamente de conservar las expectativas legítimas y garantizar la cobertura de prerrogativas inherentes a los derechos fundamentales de la seguridad social a quienes tenían cumplido el número mínimo de semanas en esa disposición. Los demás requisitos y condiciones se regulan por las normas vigentes cuando se estructuran los riesgos protegidos, por ejemplo, las condiciones de convivencia, el monto de las prestaciones o las circunstancias para la estructuración de la invalidez.”

Atendiendo a la jurisprudencia citada, en el caso concreto se tiene que, bajo los postulados del principio de la condición más beneficiosa, si bien la pensión se causó bajo la vigencia de la ley 100 de 1993, los requisitos de semanas serán los establecidos en el decreto 758 de 1990; sin embargo, los demás requisitos serán los señalados en la ley 100 de 1993, norma esta última que permite sumar tiempo privados con los públicos sin cotización.

Así las cosas, es válido tal como lo manifestó el juzgado del conocimiento, tener en cuenta las disposiciones contenidas en el decreto 758 de 1990 en virtud del principio de la condición más beneficiosa, en atención a que el señor Vanegas Vásquez se afilió al ISS y cuenta con 26.85 semanas cotizadas, además de haber prestado sus servicios al Departamento de Antioquia por espacio de 609 semanas sin cotización, todo ello con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993.

Para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes con el Decreto 758 de 1990 se deben acreditar trescientas (300) semanas en cualquier tiempo antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1994, requisito que se cumple en atención a que el afiliado cuenta con 635 semanas entre públicas y privadas con cotización.

iv) Beneficiarios de la pensión

Una vez acreditada la causación de la pensión de sobrevivientes pasa esta Sala al estudio de los beneficiarios de la prestación, que para el caso particular lo es únicamente la demandante, señora Luz Marina Duque Ocampo, quien alega tal calidad por ser la compañera permanente del causante.

La demandante afirma haber convivido con su compañero desde 1980 y hasta el momento en que este último falleció en el año 2000; el juzgado del conocimiento consideró acreditada una convivencia dentro de los 4 años anteriores a la muerte; finalmente, Colpensiones señala en sus alegatos que se debe acreditar un mínimo de 5 años de convivencia en virtud de lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia SU-149 de 2021.

Pues bien, no es procedente el alegato presentado por Colpensiones al pretender que en el caso particular se aplique, para efectos de acreditar la calidad de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes lo señalado en el artículo 13 de la ley 797 de 2003 que exige una convivencia de no menos de cinco años; en su lugar, conforme lo expuesto en las sentencias SL5147-2020 y SL4165-2021, citadas con anterioridad, se debe estudiar el tema conforme a lo regulado en el artículo 47 de la ley 100 de 1993, norma que exige una convivencia con el fallecido no menos de dos años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido.

Esta Sala comparte el raciocinio hecho por el juzgado del conocimiento que da cuenta de que la demandante acreditó ser la beneficiaria de la prestación de sobrevivientes, conforme se pasa a explicar.

Si bien la demandante afirmó que la convivencia inició en 1980, hay elementos que permiten concluir que ello no fue así, como el hecho de la existencia del proceso ante los juzgados de familia para que el causante reconociera a sus hijos; sin embargo, de la prueba testimonial y documental se da cuenta que dentro de los cuatros años anteriores a la muerte del afiliado, este ya tenía una relación de pareja con la demandante, además de ser esta última quien lo cuidó este tiempo mientras que aquel se encontraba en estado delicado de salud debido al accidente con arma de fuego del que fue víctima.

Se podría considerar que los testigos tampoco son claros en cuanto a la fecha en que inició la relación de la pareja; no obstante, todos fueron unánimes, además de constarle de forma directa, que fue la demandante quien cuidó del señor Vanegas Vásquez los últimos cuatro años.

Se desprende de lo anterior que se encuentra acreditado que entre la demandante y el causante, además de haber procreado tres hijos, tuvieron una convivencia superior a dos años, la cual inició antes de que el afiliado sufriera el accidente y la cual perduró hasta la muerte de este último. Si bien la historia clínica refiere que era la compañera permanente del paciente quien lo acompañaba a sus citas, no se puede desconocer que no se dice expresamente su nombre; sin embargo, analizada la prueba en su conjunto se concluye que fue la demandante quien lo acompañó a las mencionadas citas médicas.

De lo dicho con anterioridad, se encuentra acreditado por la demandante la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, por lo que la sentencia en tal sentido merece ser **CONFIRMADA**.

v) **Liquidaciones**

Con la expedición de la ley 100 de 1993, son únicamente los fondos de pensiones los facultados para pagar las pensiones legales de que trata el sistema general de seguridad social en pensión, que para el caso particular es Colpensiones.

Atendiendo a que el término trienal de la prescripción se vio interrumpido el 9 de julio de 2018⁵ cuando la demandante reclamó ante Colpensiones el reconocimiento pensional, se ven afectadas por este fenómeno aquellas mesadas causadas con anterioridad al mismo día y mes de 2015.

Procedió entonces esta Sala a revisar la liquidación realizada por el juzgado, observándose en ella un pequeño error en la liquidación realizada para el año 2020, pues para el juzgado tal período totaliza \$12.427.842, pero en realidad es de \$12.289.242. Asimismo, para el año 2015 deben contabilizarse 6.73 mesadas y no 6.70, toda vez que la liquidación se toma desde el día 9 de junio, inclusive.

Año	IPC	# mesadas	Valor pensión	Total Retroactivo
2015	6.77%	6.73	\$ 644,350	\$ 4,336,476
2016	5.75%	14	\$ 689,454	\$ 9,652,356
2017	4.09%	14	\$ 737,717	\$ 10,328,038
2018	3.18%	14	\$ 781,242	\$ 10,937,388
2019	3.80%	14	\$ 828,116	\$ 11,593,624
2020	1.61%	14	\$ 877,803	\$ 12,289,242
2021	5.62%	9	\$ 908,526	\$ 8,176,734
			TOTAL	\$ 67,313,858

Conforme a las anteriores consideraciones, el retroactivo pensional causado del 9 de julio de 2015 al 31 de agosto de 2021 totaliza \$67.313.858 y no \$67.433.155, por lo que la sentencia en tal sentido merece ser **MODIFICADA**.

En lo que tiene que ver con la condena por indexación, es de advertir que los efectos de la inflación son quizá más significativos en el campo laboral y de la seguridad social, dado el carácter alimentario de las prestaciones que el

⁵ Fecha que se desprende del contenido de la resolución SUB229056 del 29 de agosto de 2018 visible a folios 152 del PDF “25ContestacionDemandaColpensiones”

empleador o la entidad de seguridad social debe al trabajador o pensionado, y por lo tanto la doctrina y la jurisprudencia acuden a la corrección monetaria con el fin de procurar que el pago de lo debido sea cabal, íntegro o completo, o dicho en otros términos que el deudor cubra la prestación en su valor real.

Sobre el tema, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL359-2021, con radicado 86405 ha expresado:

“...Ahora, la indexación no implica el incremento del valor de los créditos pensionales, ya que su función consiste únicamente en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la consecuente reducción del patrimonio de quien accede a la administración de justicia, causada por el transcurso del tiempo. Tampoco puede verse como parte de la mesada, puesto que no satisface necesidades sociales del pensionado, y menos como una sanción, ya que lejos de castigar al deudor, garantiza que los créditos pensionales no pierdan su valor real.

Desde este punto de vista, cuando el juez del trabajo advierte un menoscabo a los derechos de las partes y, por este motivo, impone el pago de prestaciones económicas derivadas del sistema de pensiones, su labor no puede limitarse a la restitución simple y plana de dichos rubros; tiene la obligación de imponer una condena que ponga al perjudicado en la situación más cercana al supuesto en que se hallaría de no haberse producido el menoscabo, tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, según el cual «dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales». Y la forma en que aquello se garantiza, en el marco de la protección especial a la seguridad social, es a través de la indexación como consecuencia de la incontenible depreciación de la moneda...”

Por lo anterior, se **CONFIRMA** la condena por indexación de las mesadas pensionales objeto de esta sentencia, con base en la certificación mensual del Índice de Precios al Consumidor –IPC–, expedida por el DANE, entre la causación de cada mesada y hasta el momento efectivo del pago.

vi) Alegatos de las partes

La mandataria judicial del Departamento de Antioquia insiste en que la sentencia también debe ser conocida en grado de consulta en favor de la entidad que representa; no obstante, ello no es viable conforme a lo regulado en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad, debido a que tal figura solo procede en las situaciones especiales allí consagradas y en el caso particular no se profirió en contra del Departamento de Antioquia condena alguna.

Con los argumentos anteriores y atendiendo al principio de consonancia de que trata el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito y explícito de las alegaciones presentadas por las partes.

vii) Costas procesales

Las costas procesales de la primera instancia quedan como lo dijo el juzgado del conocimiento. Las de la segunda instancia, atendiendo a lo establecido en el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso y por no salir adelante la apelación formulada por Colpensiones, son de su cargo y en favor de la demandante. De conformidad con lo establecido en el acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de \$1.160.000.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Se **MODIFICA** el numeral segundo de la parte resolutive de la sentencia que se revisa por vía de apelación y consulta, de fecha y procedencia conocida. En su lugar se condena a Colpensiones a reconocer y pagar a la demandante por concepto de retroactivo pensional liquidado del 9 Julio de 2015 al 31 agosto de 2021 la suma de **\$67.313.858**.

SEGUNDO. En lo demás se **CONFIRMA** la sentencia.

TERCERO: Las costas procesales y agencias en derecho quedan como se dijo en la motivación de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA


HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Luz Marina Duque Ocampo
DEMANDADOS	Departamento de Antioquia Colpensiones
DECISIÓN	Confirma y modifica sentencia
MAGISTRADO PONENTE	Guillermo Cardona Martínez

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Fijado el 23 de febrero de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Se desfija el 23 de febrero de 2023 a la 5:00 pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO